



SENTENCIA. En Hermosillo, Sonora, a seis de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS para resolver en definitiva los autos originales del expediente número **RO/97/25**, instruido en contra de la presunta responsable [REDACTED], quien al momento de los hechos denunciados se desempeñaba como [REDACTED], dependiente de los **SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**, por la presunta comisión de la **FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE** establecida en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora;

ANTECEDENTES:

1. El día **treinta de mayo de dos mil veinticinco**, se recibió Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa, presentado por la **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**, en contra de la presunta responsable (Páginas 01 a la 108), mismo que se tuvo por admitido el día **tres de junio de dos mil veinticinco** (Páginas 109 a la 115); ordenándose emplazar formal y legalmente a la presunta responsable, lo que aconteció en fecha **once de julio de dos mil veinticinco** (Páginas 157 a la 177).

2. El **doce de agosto de dos mil veinticinco**, se celebró la audiencia inicial a cargo de la presunta responsable, haciéndose constar con la **comparecencia** de la misma (Páginas 181 a la 185); quien manifestó su deseo de llevarla a cabo por su propio derecho, sin la asistencia de abogado y/o defensor público, realizando una serie de manifestaciones relacionadas con las imputaciones formuladas en su contra, en la que se tuvieron por ofrecidas de las partes, mismas que fueron admitidas en auto dictado el día **veintiséis de agosto de dos mil veinticinco** (Páginas 201 a la 205).

3. Desahogadas las pruebas admitidas y al no existir alguna pendiente de desahogo, mediante auto de fecha **primero de octubre de dos mil veinticinco** (Página 219), se declaró abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; hecho lo anterior, esta Subsecretaría declaró visto el proceso y citó la causa a oír sentencia definitiva, misma que ahora se pronuncia:

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA.

Esta Subsecretaría es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo sancionador conforme a lo dispuesto por el artículo 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación en los artículos 1, 3 fracciones IV y XXV, 9 fracción I y 10 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora; 26 apartado C fracción X de la Ley Orgánica del

0224
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y artículos 4 Apartado "A" fracción I, 5 fracción III inciso a), 8 y 11 fracción I y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

II. HECHOS CONTROVERTIDOS.

Se advierte que la Autoridad Investigadora formuló Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por los hechos en él señalados (Páginas 01 a la 08), los cuales consisten medularmente en que la presunta responsable, omitió rendir su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su baja de servicio, a pesar de estar legalmente obligada para ello, hecho el cual la Autoridad Investigadora calificó como la falta administrativa no grave, prevista por el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.

Por su parte, la presunta responsable, en la audiencia inicial de fecha **doce de agosto de dos mil veinticinco** (Página 181 a la 185) argumentó que: *'Es mi deseo manifestar que no tenía conocimiento de presentar alguna declaración a la conclusión de mi puesto, ni tampoco se me notificó o requirió para la presentación de la misma por parte de la Dependencia para la que labore, siendo todo lo que deseo manifestar.'*

Síntesis de hechos que se realiza en aplicación por analogía de la Tesis de Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: **"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA PARA SU TRANSCRIPCIÓN."**¹.

III. ESTUDIO DE FONDO.

La Autoridad Investigadora denunció por la falta administrativa prevista en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, precepto normativo que a la letra dice:

"Artículo 50.- *Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:*

(...)

IV.- *Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, en los términos establecidos por esta Ley y observando la normatividad correspondiente a la reserva o confidencialidad de datos personales;"*

En ese sentido, tenemos que, comete una falta administrativa **no grave**, el servidor público que dejare de presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, en los términos establecidos por la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el

Estado de Sonora, observando la normatividad correspondiente a la reserva o confidencialidad de datos personales.

Así, tenemos que los elementos que integran la falta administrativa en cita son los siguientes:

- a) Que el sujeto activo tenga el carácter de servidor público.
- b) Que tenga la obligación de presentar su declaración patrimonial.
- c) Que haya incumplido en el tiempo y forma establecida para la presentación de tal declaración, sin causa justificada.

El primer elemento se acredita con la DOCUMENTAL PÚBLICA agregada a autos, consistentes en: Copia Certificada de Nombramiento [REDACTED] [REDACTED] dependiente de los SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, de fecha uno de enero de dos mil veintidós (Página 45 a la 53). Documental que merece pleno valor probatorio al tenor de los artículos 135, 136, 138 y 139 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. **Lográndose acreditar con ello, el carácter de servidor público de la presunta responsable.**

El segundo elemento en relación con los artículos 33 y 34 fracción III y tercer párrafo de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, se acredita con la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en: Copia Certificada del Oficio número DGVAP/1822/2022 y anexo, de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Verificación y Análisis Patrimonial, mediante el cual remite a la Titular del Órgano Interno de la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora (Páginas 17 a la 31), listado de declarantes omisos de presentación de declaración de conclusión, dentro del cual se desprende, que la presunta responsable [REDACTED], que la misma causó baja el día dieciséis de enero de dos mil veintidós, lo que se corrobora de la copia certificada del Formato Unico de Movimientos de Personal, expedido por la Directora General de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Sonora (páginas 61 y 63); pruebas con las que se demuestra la obligación de la presunta responsable de presentar en tiempo y forma su declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de conclusión dentro de los sesenta días naturales siguientes a su baja de servicio. Documentales que merecen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 135, 136, 138 y 139 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.

En este tenor, los artículos 33 y 34 fracción III y tercer párrafo de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, a la letra dicen:

“Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora

Artículo 33.- Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, todos los Servidores Públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Artículo 34.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes:

- a). - Ingreso al servicio público por primera vez;
- b). - Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de conclusión de su último encargo;

II.- Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año;

y

III.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión

(...)

Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, **sin causa justificada**, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes.

Para el caso de omisión, sin causa justificada se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en la presente ley.”.

De forma que, es válido sostener que es obligación de todo servidor público el presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la terminación de su empleo, cargo o comisión.

En ese tenor, la presunta responsable tenía la obligación al concluir su cargo como servidora pública, de presentar su declaración de conclusión dentro del periodo dentro de los sesenta días naturales siguientes a su baja de servicio, es decir, dentro de los sesenta días posteriores al **dieciséis de enero de dos mil veintidós, que es la fecha en la que concluyó su cargo**. Así la presunta responsable, estaba obligada a cumplir con su obligación entre el **diecisiete de enero de dos mil veintidós y diecisiete de marzo de dos mil veintidós**.

Previo a pronunciarnos respecto al tercero de los elementos de la falta administrativa denunciada, es importante establecer que la fracción III cuarto párrafo del artículo 34 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, obliga a esta Subsecretaría, a llevar a cabo el análisis sobre la existencia o no existencia de causa justificada en la omisión de presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión, considerando que la sanción a imponer, prevista en el antepenúltimo párrafo de la citada fracción, se encuentra sujeta o condicionada a la evaluación sobre la existencia o no existencia de causa justificada, expresada y probada por la presunta responsable, según el contenido de su último párrafo motivo por el cual, a efectos de dar cumplimiento a la citada obligación, procederemos al análisis de las manifestaciones realizadas por la [REDACTED], mediante su escrito presentado ante esta Autoridad Resolutora, tendientes a justificar la omisión de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión en tiempo y forma, en relación con el

material probatorio ofrecido con tal fin y con ello, estar en condiciones de determinar sobre la presencia o no presencia de causa justificada a su favor; resultando lo siguiente:

En audiencia inicial de fecha doce de agosto de dos mil veinticinco, la [REDACTED], realizó las manifestaciones siguientes:

“Es mi deseo manifestar que no tenía conocimiento de presentar alguna declaración a la conclusión de mi puesto, ni tampoco se me notificó o requirió para la presentación de la misma por parte de la Dependencia para la que labore, siendo todo lo que deseo manifestar”. Y con el propósito de acreditar la causa justificada invocada, ofreció como prueba superveniente y le fue admitido, en la actuación del **veintiséis de agosto de dos mil veinticinco** (Fojas de la 201 a la 205), el siguiente medio de convicción:

1. Copia simple del acuse de recibido de declaración de conclusión simplificada 2022, y la respectiva carta de aceptación ambas de fecha doce de agosto de dos mil veinticinco correspondientes a la [REDACTED] (folio 199 a la 200).

Respecto a las manifestaciones antes transcritas con el propósito de establecer la presencia de causa justificada para el incumplimiento de su obligación, no son procedentes, toda vez que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y la obligación se encuentra claramente prevista en los artículos 33 y 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora; **aunado** a que no se advirtieron impedimentos externos que justificaran el retraso, siendo atribuible únicamente a negligencia personal, afectando el control patrimonial institucional, reduciéndose lo manifestado a meros intentos de justificaciones no probadas y carecen de relevancia en consecuencia, para deslindarlo de la responsabilidad imputada por la investigadora, al no existir probada causa justificada prevista en la fracción III párrafo cuarto del artículo 34 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.

En términos de los artículos los artículos 163 y 164 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora; del artículo 78 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa; artículos 282 y 285 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia, según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley aludida y atendiendo además, a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, a la documental privada ofrecida por la denunciada y descrita en el párrafo anterior, se le otorga valor probatorio pleno, para acreditar las circunstancias, hechos y actos que expresamente constan o se deducen de ella; sin embargo, resulta insuficiente para probar su pretensión, de justificar la no presentación de su declaración modalidad de conclusión en tiempo y forma y con ello, la presencia de una causa justificada; considerando que la copia simple del “Acuse de Recibo de Declaración: Conclusión simplificada 2022”, de fecha doce de agosto de dos mil veinticinco, así como la respectiva carta de aceptación, correspondiente a la [REDACTED] (Páginas 199 a la 200); si bien es cierto prueban que

presentó su declaración de conclusión; también lo es, que prueba que lo hizo de manera extemporánea; el contenido de la documental aludida, corrobora la conducta imputada por la denunciante, relativa, a que la [REDACTED], no cumplió con su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión, entre el **diecisiete de enero de dos mil veintidós y diecisiete de marzo de dos mil veintidós** y el haber presentado su declaración patrimonial de manera extemporánea, el dieciséis de mayo de dos mil veinticinco, no lo excluye de responsabilidad administrativa.

Precisada la ausencia de causa justificada en el incumplimiento de la obligación a cargo de la denunciada, retomamos el estudio del tercer elemento que integra la falta administrativa imputada al [REDACTED], estableciendo que de acuerdo al contenido de los artículos 163 y 164 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora; del artículo 78 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora; artículos 282 y 285 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia, según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley aludida; las pruebas ofrecidas por la investigadora, que consisten en **DOCUMENTALES PÚBLICAS** agregadas a autos, consistentes en la Copia Certificada del Oficio número **DGVAP/1822/2022** y anexo, de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Verificación y Análisis Patrimonial, mediante el cual remite al Titular del Órgano Interno de la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora (Páginas 17 a la 31), listado de declarantes omisos de presentación de declaración de conclusión, donde le informa que entre otros servidores públicos, la presunta responsable había incumplido con su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión, lo cual motivó el origen de la indagatoria correspondiente, resultan pertinentes e idóneos y se les concede valor probatorio pleno, para acreditar el tercer elemento en estudio; considerando que de acuerdo al contenido de los artículos 33 y 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, se acredita que la [REDACTED], al concluir su cargo como servidora pública, tenía la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión, durante el periodo comprendido entre el **diecisiete de enero de dos mil veintidós y diecisiete de marzo de dos mil veintidós** y no lo hizo; y como se dijo en párrafos que anteceden, las manifestaciones vertidas en la audiencia inicial por la denunciada, acordado en Audiencia Inicial, a fin de justificar la omisión de su obligación, no quedaron probadas, la valoración se realiza de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, establecidas en el artículo 136 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, en relación con los artículos 138 y 139 de la misma Ley.

En consecuencia, se estiman **acreditados los elementos** de la falta administrativa no grave consistente en incumplir con la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión, toda vez que la Autoridad Investigadora demostró que la presunta responsable, al concluir su cargo como servidora pública, estaba obligada legalmente a presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión entre el

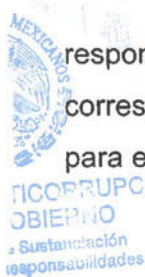
diecisiete de enero de dos mil veintidós y diecisiete de marzo de dos mil veintidós y fue omisa en presentarla en **tiempo y forma**, en los términos de lo establecido por el artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.

Luego, al no obrar alguna probanza a favor de la presunta responsable que justificara la extemporaneidad con la que presentó su declaración de situación patrimonial y de intereses y al haberse superado la presunción de inocencia del mismo, prevista en el artículo 140 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora y atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, de acuerdo con el artículo 136 de la Ley en cita, es claro que la **conducta imputada quedó plenamente acreditada**.

En consecuencia, se tiene por acreditada la **FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE** establecida en el **ARTÍCULO 50 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES PARA EL ESTADO DE SONORA**.

IV. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Acreditada que fue la existencia de una falta administrativa no grave y la responsabilidad de la responsable, para efecto de determinar la sanción que corresponde, se debe acudir al artículo 81 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, mismo que a la letra dice:



“Artículo 81.- Para la individualización de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, además de acreditarse todos los elementos subjetivos, objetivos y normativos, cuando la conducta lo exija, respecto de las faltas administrativas descritas en esta ley, se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:

- I.-** El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio;
- II.-** Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; y
- III.-** La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

En caso de reincidencia de faltas administrativas no graves, la sanción que imponga la autoridad resolutora no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.

Las sanciones económicas impuestas por la Secretaría o los Órganos Internos de Control constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o del patrimonio de los entes públicos, según corresponda. Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por la Secretaría de Hacienda del Estado o los Ayuntamientos, por conducto de su dependencia respectiva, según corresponda, a la que será notificada la resolución emitida.”

El artículo en cita contempla los elementos que han de considerarse para la individualización de la sanción, en atención a ello:

Respecto de los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba la servidora pública cuando incurrió en la falta, se tiene que el responsable ostentó el cargo de servidor público, con el puesto de [REDACTED] dependiente de los **SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**.

Con relación a la **fracción I**, se advierte que el cargo de la responsable era servidor público, con el puesto de [REDACTED] **SERVICIOS DE SALUD DE SONORA** y que tenía una **antigüedad de dos años aproximadamente** en el servicio público, lo que se acredita con las manifestaciones por ella realizadas en la audiencia inicial (páginas 181 a la 185); **elemento este último que le perjudica** al ser nivel operativo con **suficiente** tiempo en el servicio público, por lo que tenía el deber de conocer y cumplir las obligaciones establecidas en la normativa relacionada con el cargo público desempeñado, especialmente en materia de declaraciones patrimoniales.

Con relación a la **fracción II**, atiende a las condiciones exteriores y los medios de ejecución de la infracción, ésta la constituyó la omisión en la que incurrió el responsable, quien al concluir el cargo como servidor público, estaba obligada legalmente a presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión entre el **diecisiete de enero de dos mil veintidós y diecisiete de marzo de dos mil veintidós** y fue omisa en presentarla en tiempo y forma, en términos de lo establecido por el artículo 34 fracción III de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, como ya antes ha sido acreditado y del expediente que se resuelve, no se advierte la existencia impedimentos externos que justificaran la omisión atribuida; por lo tanto **estos elementos le perjudican**.

Atendiendo la **fracción III**, relativa a la reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, esta Resolutora advierte que en la base de datos del Sistema de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales, que se lleva en esta Subsecretaría, no existen antecedentes de sanciones firmes del mismo tipo de responsabilidad administrativa, instruidos en contra del servidor público responsable, **por lo que no le perjudica**.

De todo lo antes señalado, se advierte que **existen elementos que le perjudican al individualizar la sanción, como lo son la antigüedad en el servicio público, las condiciones exteriores y los medios de ejecución en la comisión de faltas administrativas**.

Ahora, el artículo 34 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, en su fracción III, así como en su penúltimo párrafo establece textualmente lo siguiente:

“Artículo 34.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

...

III.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.

...

Para el caso de omisión, sin causa justificada, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año...”

El artículo 80 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, prevé por la comisión de **Faltas Administrativas No Graves**, las siguientes sanciones:

“Artículo 80.- *En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos Internos de Control impondrán las sanciones administrativas siguientes:*

I.- Amonestación pública o privada;

II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión;

III.- Destitución de su empleo, cargo o comisión; y

IV.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

V.- Sanción económica, la cual se impondrá en términos de los artículos 90 y 91 de la presente Ley, cuando proceda como producto de los daños y perjuicios causados bajo los supuestos previstos en el artículo 51.

La Secretaría y los Órganos Internos de Control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales.

En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.”

De forma que, considerando el catálogo de sanciones antes citado, habiendo valorado los elementos de prueba que fueron aportados al procedimiento que se ventila y tomando en cuenta los factores establecidos en el artículo 81 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, pero que la omisión vulnera los principios de legalidad y rendición de cuentas y afecta el control patrimonial de la función pública, esta autoridad estima justo y equitativo imponer la sanción de **INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS**, por un periodo de **TRES MESES**, en contra de la responsable de conformidad con la fracción III penúltimo párrafo del artículo 34 y la fracción IV del artículo 80 antes citado.

V. FALLO.

De la valoración de las pruebas conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, quedó plenamente acreditado que la presunta es

responsable de cometer la **Falta Administrativa No Grave** prevista en el **Artículo 50 fracción IV** de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora; por lo tanto, se determina imponerle la sanción de **INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS**, por un periodo de **TRES MESES**, en contra de la responsable de conformidad con la fracción III penúltimo párrafo del artículo 34 y del artículo 80 de la citada Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora.

VI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con relación a los artículos 19 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente sentencia suprimiendo los datos personales de la responsable, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso, por escrito o por medio de autenticación similar, para que sus precitados datos personales puedan difundirse.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve al tenor de los siguientes:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO. Esta Subsecretaría de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora, es y fue competente para conocer y resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando I de esta sentencia.

SEGUNDO. Conforme a lo establecido en el considerando III de la presente sentencia, en autos quedaron plenamente acreditados los elementos de la **FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE** establecida en el **ARTÍCULO 50 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES PARA EL ESTADO DE SONORA**, así como la plena responsabilidad de la [REDACTED] en su comisión; consecuentemente, se decreta la **EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA** en su contra.

TERCERO. Se le aplica a la responsable la sanción de **INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS**, por un periodo de **TRES MESES**, de conformidad con la fracción III penúltimo párrafo del artículo 34 y con la fracción IV del artículo 80 y 81 de la Ley de la Materia, con relación al considerando IV de este fallo.

CUARTO. Se informa a la responsable que, en caso de reincidencia, se le impondrá una sanción mayor a la antes establecida, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 81 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, el cual define la reincidencia como la comisión de una infracción del mismo tipo de otra ya cometida.

QUINTO. Se hace del conocimiento a la responsable que la presente sentencia, puede ser impugnada a través del Recurso de Revocación, previsto por el artículo 215 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.

SEXTO. En su oportunidad, previa ejecutoria de la presente sentencia, notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar y posteriormente, archívese el presente expediente como asunto total y absolutamente concluido.

NOTIFÍQUESE con copia de la presente sentencia a la responsable, mediante notificación que se fije en la Tabla de Avisos que se lleva en esta Subsecretaría, comisionándose para tal diligencia a los notificadores y a los testigos de asistencia quienes se encuentran adscritos a esta Subsecretaría.

Asimismo, hágase la publicación respectiva en la Lista de Acuerdos de esta Unidad Administrativa. Lo anterior con fundamento en el artículo 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, en relación con el artículo 123 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al procedimiento que nos ocupa.

Así lo resolvió y firma el **Mtro. Alejandro Zepeda Velarde, Subsecretario de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**, ante los testigos de asistencia, con los que actúa y quienes dan fe. **DAMOS FE.** -



SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
MTRO. ALEJANDRO ZEPEDA VELARDE
 Subsecretario de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades
 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

MTRA. CINTHYA CORRAL MAR

LIC. SORAYDA SERRANO CALDERON

Lista. El 07 de noviembre de 2025, se publicó en Lista de Acuerdos la sentencia que antecede. **Conste.**